

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA SALA DECISIÓN

Santiago de Cali, once (11) de marzo del dos mil veintiuno (2021).

#### Auto Interlocutorio No. 12

<b>Radicación:</b>	76-001-23-33-000-2021-00356-00
<b>Acción:</b>	Nulidad Electoral
<b>Demandante:</b>	SINDICATO DE PROCURADORES JUDICIALES "PROCURAR" <a href="mailto:sindicatodeprocuradores@gmail.com">sindicatodeprocuradores@gmail.com</a> <a href="mailto:procurar@procuraduria.gov.co">procurar@procuraduria.gov.co</a>
<b>Demandado1:</b>	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN <a href="mailto:procesosjudiciales@procuraduria.gov.co">procesosjudiciales@procuraduria.gov.co</a>
<b>Demandado2:</b>	AURORA MARTINEZ ARANGO <a href="mailto:amartineza@procuraduria.gov.co">amartineza@procuraduria.gov.co</a>
<b>Ministerio Público</b>	Franklyn Moreno Millán <a href="mailto:procjudadm166@procuraduria.gov.co">procjudadm166@procuraduria.gov.co</a>
<b>Instancia:</b>	Única
<b>Tema:</b>	Declara fundado impedimento y asume el conocimiento

#### RESUELVE IMPEDIMENTO

Se decide la manifestación de impedimento realizada por los magistrados Zoranny Castillo Otálora y Víctor Adolfo Hernández Díaz, previas las siguientes consideraciones.

#### I. ANTECEDENTES.

Los magistrados manifestaron su impedimento para conocer de la presente demanda electoral, por la causal consagrada en el artículo 141.2 del CGP, del siguiente tenor:

"Art. 141.- Son causales de recusación las siguientes:

2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su conyugue, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente. (...)"

**Describieron:**

- La señora Aurora Martínez Arango, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pidió la nulidad del Decreto 3872 de 8 de agosto de 2016 expedido por la Procuraduría General de la Nación, que dispuso su desvinculación del cargo de Procuradora Judicial II Delegada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por infracción del ordenamiento superior sobre protección laboral denominada retén social por la condición de pre-pensionable. El proceso se radicó 76001-23-33-003-2017-00393-00 y actualmente se encuentra en etapa probatoria.
- Por auto No. 424 de 14 de septiembre de 2017 los memorialistas integraron sala de decisión y decretaron la suspensión provisional del acto acusado, y a la vez dispusieron ordenar a la Procuraduría General de la Nación que nombrara a la demandante en un cargo de Procurador Judicial II que no hubiere sido provisto de la lista de elegibles, hasta que cumpla la edad legal para acceder a su pensión de vejez y sea incluida en nómina de pensionados.
- En cumplimiento de lo anterior, la entidad demandada expidió el Decreto 6352 del 14 de diciembre de 2017 que vinculó a la señora Aurora Martínez Arango como Procuradora 28 Judicial II para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social de Cali.
- En el caso de ahora se pide la nulidad del artículo 15 del Decreto 1348 del 23 de diciembre de 2020, proferido por el Procurador General de la Nación, por el cual se dispuso prorrogar por seis meses el nombramiento provisional de la señora Aurora Martínez Arango como Procuradora 28 Judicial II para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social de Cali.

## **II. CONSIDERACIONES**

### **A. COMPETENCIA Y TRÁMITE.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 21 de la ley 2080 de 2021, vigente a partir del 26 de enero de 2020 en asuntos procesales, corresponde a los despachos 11 y 13 que integran la Sala de Decisión Fija 1, resolver de plano la manifestación de impedimento de los magistrados titulares de los despachos 3 y 12, en vista de lo regulado por el Acuerdo No. CSJVAA21-8 de 21 de enero de 2021 emanado del Consejo Seccional de la Judicatura.

### **B. ANALISIS DEL CASO CONCRETO.**

Las causales de impedimento son taxativas y de aplicación restrictiva, porque constituyen una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que le

corresponde al juez, por tanto, no pueden extenderse o ampliarse a criterio del intérprete. Al respecto precisó el Consejo de Estado<sup>1</sup>:

“El artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia le impone a los Jueces el deber de respetar, cumplir y, dentro de la órbita de sus competencias, hacer cumplir la Constitución y la ley.

La imparcialidad e independencia judicial, como objetivos superiores, están orientadas a garantizar que las actuaciones se ajusten a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad, sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública, artículo 209 de la Constitución Política.

La regulación legal de las catorce causales de recusación consagradas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y de las 2 contenidas en el artículo 160 del Código Contencioso Administrativo, persiguen un fin lícito, proporcional y razonable; sin embargo, se debe impedir que en forma temeraria y de mala fe, se utilice el incidente de recusación como estrategia para separar al Juez de los asuntos de su conocimiento. Para ello, resulta indispensable que el recusante no se limite a efectuar afirmaciones de carácter subjetivo, sino que se requiere de la identificación precisa de la causal que se invoque y de la prueba de la ocurrencia de los hechos denunciados, para efectos de establecer si el funcionario judicial recusado debe ser o no separado del asunto que viene conociendo; las causas que dan lugar a ello no pueden deducirse ni ser objeto de interpretaciones subjetivas.”

En esa misma línea se pronunció la Corte Constitucional<sup>2</sup>.

Ahora bien, respecto al contenido y alcance de la causal segunda de impedimento, se ha decantado que la expresión *“haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior”* debe entenderse como ejercer jurisdicción en la segunda instancia cuando previamente se tuvo la calidad de juez en la primera instancia, lo anterior porque el fin que persigue la norma es que garantizar el principio de imparcialidad en la doble instancia.

Al respecto dijo el Consejo de Estado en reciente pronunciamiento<sup>3</sup>:

“Esta causal se fundamenta en el respeto al principio de la doble instancia y tiene por finalidad impedir que el mismo juez que ha conocido en instancia anterior intervenga posteriormente sobre el mismo asunto, juzgando su propia actuación, con lo cual se hace nugatoria la nueva instancia, pues termina resolviendo la litis el mismo juez y con la predisposición a sostener el mismo criterio que en oportunidad anterior.”

Y es que para el efecto debe tenerse en cuenta que la labor de la segunda instancia consiste en verificar, sobre la base de la decisión impugnada, el acierto o el error del *a-quo* en el juicio realizado; en otras palabras, en establecer si el material fáctico y jurídico incorporado al proceso ha sido correctamente valorado y la decisión ajustada a derecho. De donde se colige que el conocimiento que inhabilita legalmente al juez para un pronunciamiento dentro del

---

<sup>1</sup> CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, sentencia del veintiuno (21) de abril de dos mil nueve (2009).

<sup>2</sup> Corte Constitucional, A154/2006 Referencia: expediente D-6013, Recusación formulada por Marta Bernal González contra los Magistrados Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil. Magistrada Ponente: CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

<sup>3</sup> CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Providencia de fecha ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020), Radicación número: 25000-23-41-000-2015-00845-02.

proceso, está referido a la manifestación de un criterio concreto sobre el asunto de fondo, o el sentido en el que debe resolverse lo que es materia de debate, como lo dice la norma, “*en instancia anterior*”.

La consagración de la causal de impedimento que se analiza garantiza precisamente en el juez de conocimiento la ausencia de todo ánimo prevenido en el asunto debatido y decidido, o como ocurre en este caso, que la revisión de la providencia de primer grado tenga la imparcialidad del juez de segunda instancia al proferir su decisión definitiva”.

En el mismo sentido dijo la Corte Suprema de Justicia<sup>4</sup>:

“La razón de ser de lo anterior estriba en que, si el trámite o el recurso involucran una providencia de la autoría del funcionario judicial, es natural entender, considerando la naturaleza humana, la predisposición a defender la posición asumida sobre el particular. Frente a cualquier sospecha o duda, por lo tanto, lo aconsejable es erradicar toda circunstancia que pueda contaminar la imparcialidad e independencia debidas, o que conlleve al recelo o desconfianza, para así cumplir con el ideal de garantizar el derecho de las partes a que sus diferencias sean dirimidas de manera imparcial, objetiva y autónoma.

Se precisa, sin embargo, dicha hipótesis normativa, se concibe, respecto de un mismo proceso, porque así el juez o el magistrado en otros asuntos haya conocido de cuestiones relacionadas, por relevantes que sean, al fin de cuentas, en todos esos casos, se trata del ejercicio propio de funciones judiciales.”

De lo anterior se colige que en el caso que se estudia no se configura la causal segunda, por las siguientes razones:

En primer lugar, porque el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 76001-23-33-003-2017-00393-00 en cual funge como parte actora la señora Aurora Martínez contra la Procuraduría General de la Nación, es autónomo e independiente del presente medio de control de nulidad electoral interpuesto con el fin de anular un acto distinto al que es objeto de reproche en el primer proceso y, en segundo lugar, pero más importante, porque los memorialistas no conocerían la demanda electoral en segunda instancia.

Empero, es preciso resaltar que los magistrados Zoranny Castillo Otalora y Víctor Hernández emitieron un concepto respecto de la legalidad del vínculo laboral de la señora Aura Martínez con la Procuraduría General de la Nación en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho en que ella funge como demandante, al punto que decretaron una medida cautelar que ordenó su permanencia en el cargo.

Ello tiene relevancia y estrecha relación con la litis que plantea ahora el Sindicato de Procuradores Judiciales “PROCURAR” en juicio de nulidad electoral, toda vez que se pide la anulación del acto contenido en el *Decreto 1348 del 23 de diciembre de 2020* proferido por el Procurador General de la Nación que prorrogó su

---

<sup>4</sup> Corte Suprema de Justicia, AC2400-2017, Radicación: 08001-31-03-003-2009-00055-01, providencia de fecha diecinueve (19) de abril de dos mil diecisiete (2017).

nombramiento como Procuradora 28 Judicial II para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social de Cali.

Dicho lo anterior, es claro que se trata de dos procesos judiciales diferentes, empero, entre ellos hay una relación sustancial y de cierto modo comparten elementos importantes en cuanto al problema jurídico a resolver.

Bajo ese panorama, los hechos narrados son configurativos de la causal de impedimento contenida en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso "*Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso*".

Por lo expuesto, para garantizar imparcialidad que deben regir toda actuación judicial, se declarará fundado el impedimento de los magistrados Víctor Adolfo Hernández Díaz y Zoranny Castillo Otálora para conocer el presente medio de control de nulidad electoral.

### DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la sala de decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

### RESUELVE

**PRIMERO: DECLARAR** fundadas las manifestaciones de impedimento de los magistrados Zoranny Castillo Otálora y Víctor Adolfo Hernández Díaz para conocer, tramitar y decidir la demanda electoral de la referencia.

**SEGUNDO. INTEGRAR** la sala de decisión para el estudio del impedimento y el trámite procesal subsiguiente con los magistrados Ana Margoth Chamorro Benavides y Guillermo Poveda Perdomo.

**TERCERO: ORDENAR** el cambio de ponente en el aplicativo SAMAI y solicitar la compensación del presente proceso a través del formato respectivo ante la Oficina de Reparto.

**CUARTO: NOTIFICAR** esta providencia a las partes y dar cuenta inmediatamente para proveer la admisión de la demanda y traslado de medidas cautelares.

Los Magistrados,

  
**ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES**  
Magistrada



**GUILLERMO POVEDA PERDOMO**  
**Magistrado**